



Consejo de Seguridad

Distr. general
1º de agosto de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 31 de julio de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el documento adjunto al informe de Antigua y Barbuda presentado en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**

Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido
en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa
a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Carta de fecha 22 de julio de 2002 dirigida Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas

Adjunta a la presente carta le envío a V.E. la comunicación de Antigua y Barbuda relativa a la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice). Antigua y Barbuda lamentan la demora, pero mi país estaba resuelto a presentar un informe adecuado, pese a lo limitado de nuestro personal, sobre el que pesa una enorme carga de trabajo, en particular la de tener que cumplimentar los cuestionarios del Fondo Monetario Internacional, el Grupo de Trabajo sobre medidas financieras relativas al blanqueo de dinero y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, además de tener que cumplir con las demandas de diversos organismos de las Naciones Unidas.

Esperamos que encuentre nuestro informe aceptable y estamos dispuestos a prestar toda la asistencia complementaria que se necesite.

(Firmado) Patrick Albert **Lewis**
Embajador

Apéndice

Informe de Antigua y Barbuda presentado al Comité contra el Terrorismo en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, de 28 de septiembre de 2001*

1. Introducción

Antigua y Barbuda, junto con los demás Estados Miembros de las Naciones Unidas, está firmemente resuelta a erradicar los actos de terrorismo y las actividades terroristas que amenazan a la paz y la seguridad internacionales. Antigua y Barbuda está también resuelta a cooperar con el Comité contra el Terrorismo establecido por la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad relativa a la lucha contra el terrorismo.

2. Legislación

Antes del 11 de septiembre de 2001, Antigua y Barbuda ya tenía en su repertorio legislativo “La Ley de Represión del Terrorismo, No. 17 de 1993”. El artículo 5 de la Ley declara constitutivo de delito realizar ciertos actos tales como el asesinato, el homicidio, la violación, el secuestro y el rapto, el encarcelamiento fraudulento, el incendio voluntario, el uso de explosivos y de pólvora para cometer delitos.

A raíz del 11 de septiembre de 2001, Antigua y Barbuda promulgó el 27 de diciembre de 2001 la Ley de Prevención del Terrorismo No. 15 de 2001. Esta Ley prohíbe financiar organizaciones terroristas y actividades terroristas. Prohíbe además suministrar, vender o transferir a terroristas o a organizaciones terroristas armas, municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar, aeronaves o buques y piezas de repuesto y materiales conexos con respecto a lo anterior. En virtud de dicha Ley, están prohibidos los tratos económicos de cualquier tipo con organizaciones terroristas o con terroristas. La Ley prohíbe también a toda persona que se encuentre en Antigua y Barbuda prestar servicios financieros a terroristas u organizaciones terroristas.

La Ley de Prevención del Terrorismo autoriza a la Autoridad Supervisora, designada en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, a publicar en el Boletín Oficial los nombres de las personas sospechosas de ser terroristas o de pertenecer a organizaciones terroristas, y a congelar las cuentas y demás activos de tales personas.

Medidas adoptadas en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo

3. Medidas ejecutivas adoptadas por el Gobierno

El Gobierno de Antigua y Barbuda ha enviado una señal de alerta a los oficiales de inmigración y aduanas para que vigilen la llegada de aquellas personas de las que Antigua y Barbuda ha recibido, de los servicios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, información de que han participado en actividades terroristas o de que pertenecen a organizaciones terroristas.

* Los anexos pueden consultarse en los archivos de la Secretaría.

4. Párrafo 1 de la parte dispositiva

Antigua y Barbuda promulgó la Ley de Prevención del Terrorismo, No. 15 de 2001. La Ley entró en vigor el 27 de diciembre de 2001. La Ley prohíbe la financiación de terroristas y de actividades terroristas y declara delito la violación de cualquiera de las previsiones contenidas en la misma. La violación de cualquiera de esas prohibiciones se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión y una multa de 100.000.00 dólares. Además, el tribunal está facultado a ordenar la pérdida legal de los bienes y activos involucrados. Por tanto, Antigua y Barbuda cumple plenamente el elemento de la resolución 1373 de 2001 relativo a la financiación.

Inciso a) —¿Qué medidas se han adoptado para prevenir y reprimir la financiación de actos terroristas, además de las enumeradas en sus respuestas a las preguntas relativas a los incisos b) a d) del párrafo 1?

La Autoridad Supervisora ha ejercido las facultades que le confiere la Ley de Prevención del Terrorismo y ha publicado los nombres de los terroristas y organizaciones terroristas sospechosos. La publicación de esos nombres apareció en los números 19 y 20 del Boletín Oficial de abril de 2002. La Autoridad Supervisora ha ordenado a todas las instituciones financieras que congelen las cuentas de todos los terroristas y de las organizaciones terroristas cuyos nombres se publicaron en el Boletín Oficial. También se avisó a las instituciones financieras de que notificaran a la Autoridad Supervisora las transacciones registradas en las cuentas de terroristas y organizaciones terroristas indicados en el Boletín Oficial. También se han dado instrucciones financieras en el sentido de averiguar si algunas de las personas y organizaciones cuyos nombres fueron publicados por la Autoridad Supervisora tuvieron en algún momento cuenta en esas instituciones.

Antigua y Barbuda, como miembro del Grupo de Trabajo del Caribe sobre medidas financieras relativas al blanqueo de dinero, es partidaria de que se amplíe su mandato con objeto de incluir la represión de la financiación del terrorismo.

Inciso b) —¿Qué delitos y penas se prevén en su país para las actividades enumeradas en este inciso?

La Ley de Prevención del Terrorismo, No. 15 de 2001, establece una serie de delitos. En el artículo 5 de la Ley se declara delito realizar operaciones comerciales o relativas a bienes de cualquier tipo situados en Antigua y Barbuda que pertenezcan a un terrorista u organización terrorista. También es delito que una persona que se encuentre en Antigua y Barbuda lleve a cabo cualquier transacción o tratos sobre bienes de cualquier tipo situados fuera de Antigua y Barbuda que pertenezcan a un terrorista u organización terrorista. La prohibición indicó específicamente los bienes el Gobierno de los Talibán en el territorio del Afganistán, de la organización Al-Qaida o de cualquier organización terrorista mencionada en el Boletín Oficial de conformidad con las disposiciones de la Ley. Las transacciones relativas a bienes o empresas que se sepa que pertenecen a Osama bin Laden o que están a su nombre quedan específicamente prohibidas.

El castigo para el culpable de un delito de infringir cualquiera de las prohibiciones de la Ley es una pena máxima de prisión de 25 años y además el tribunal está facultado a confiscar en favor de la Corona los bienes o el producto resultante de la transacción o negocio.

En virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, una institución financiera comete delito si no cumple una instrucción dictada por la Autoridad Supervisora respecto de una cuenta u otro activo de un terrorista u organización terrorista. Puede imponerse una multa de 100.000 dólares a la institución que sea declarada culpable de incumplir tal instrucción.

Inciso c) —¿Qué legislación y procedimientos existen para congelar las cuentas y activos en bancos e instituciones financieras? Sería útil que los Estados dieran ejemplos de algunas de las medidas pertinentes adoptadas.

El Gobierno congela cuentas y activos en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero de 1996, Ley sobre el Producto de los Delitos de 1993 y la Ley de Prevención del Terrorismo de 2001.

Ninguno de los individuos o grupos indicados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han sido identificados o se los han detectado como titulares o propietarios de cuentas o activos en Antigua y Barbuda.

Inciso d) —¿Qué medidas existen para prohibir las actividades enumeradas en este inciso?

La Ley de Prevención del Terrorismo prohíbe a toda persona que se encuentre en Antigua y Barbuda tener tratos sobre bienes, dondequiera que se encuentren, de cualquier persona u organización indicada como terrorista u organización terrorista. La Ley mencionaba al Gobierno del Afganistán bajo los Talibán, a la organización Al-Qaida y a Osama bin Laden.

La Ley prohíbe a las instituciones financieras que operan en Antigua y Barbuda prestar servicios financieros a todo terrorista u organización terrorista.

En virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, la Autoridad Supervisora está facultada para exigir a toda institución financiera o persona que tenga posición o control sobre cualquier activo a congelar las cuentas y activos pertenecientes a Osama bin Laden, Al-Qaida o cualquier otra organización terrorista. Toda persona a la que se requiera que congele las cuentas y activos mencionados comete un delito si no cumple con el requerimiento.

Párrafo 2 de la parte dispositiva

Inciso a) —¿Qué legislación u otras medidas existen para dar efecto a este inciso? En particular, ¿en qué figuras delictivas están encuadrados: i) el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y ii) el abastecimiento de armas a los terroristas? ¿Qué otras medidas existen para ayudar a evitar esas actividades?

El artículo 4 de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2001, prohíbe la venta, transferencia o suministro, directa o indirectamente, de armas, municiones, vehículos y equipos militares, equipo paramilitar, aeronaves o buques, o piezas de repuesto y material conexo respecto de los materiales antes mencionados a cualquier terrorista u organización terrorista o al Gobierno del Afganistán bajo el control de los Talibán.

La prohibición comprende el suministro de asesoramiento técnico, ayuda o instrucción relativa a actividades militares o a personal armado. También están incluidos en la prohibición determinados productos químicos, tales como el anhídrido ascético y las armas químicas, biológicas o nucleares de destrucción en masa.

Inciso b) —¿Qué otras medidas se están adoptando para prevenir la comisión de actos de terrorismo?, y en particular, ¿qué mecanismos de alerta temprana existen que permitan el intercambio de información con otros Estados?

Las leyes de inmigración de Antigua y Barbuda contienen disposiciones que declaran inmigrantes ilegales a determinadas personas, entre las que pueden estar los designados como terroristas. Por consiguiente, un inmigrante ilegal que se encuentre en Antigua y Barbuda puede ser deportado.

Antigua y Barbuda coopera actualmente con los países de la región por medio del Sistema de Seguridad Regional para vigilar el movimiento de determinados individuos considerados indeseables, o bien por ser sospechosos de tráfico de estupefacientes o blanqueo de dinero o bien por ser personas pertenecientes a organizaciones terroristas o relacionadas con terroristas.

El intercambio de información y la reunión de datos sobre terroristas y actividades terroristas se efectúa mediante la cooperación con servicios de información exteriores, tales como la Interpol, y por medio de acuerdos bilaterales.

Inciso c) —¿Qué legislación o procedimientos existen para impedir que los terroristas actúen desde su territorio en contra de otros Estados o de sus ciudadanos? Sería útil que los Estados dieran ejemplos de las medidas que hubiesen adoptado al respecto.

En virtud de la Ley de Inmigración y Pasaportes, Cap. 208 (IPA), se denegaría cobijo a los nacionales de países extranjeros que financien, proyecten, faciliten o cometan actos terroristas. Los nacionales de Antigua y Barbuda que realicen tales actividades serán perseguidos en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo 2001 (PTA) o la Ley de Represión del Terrorismo de 1993 (STA) o se consideraría su extradición al país extranjero en el que se hayan cometido tales delitos.

La Ley de Inmigración y Pasaportes contiene disposiciones que facultan al Gobernador general, a prohibir discrecionalmente, por orden, a cualquier extranjero o categoría de extranjeros entrar en Antigua y Barbuda. La Ley confiere también al Gabinete la facultad de prohibir la entrada de las personas que, según información fidedigna o asesoramiento, por orden del Gabinete se consideren habitantes o visitantes indeseables de Antigua y Barbuda.

En virtud de las dos disposiciones antes mencionadas el terrorista o la persona que tenga relaciones con terroristas o que financie o ayude de cualquier otra manera a los terroristas será considerada indeseable y se prohibirá su entrada en Antigua y Barbuda o, si se encuentra en Antigua y Barbuda, será deportada.

Inciso d) —¿Qué legislación o qué procedimientos existen para impedir que los terroristas actúen desde su territorio en contra de otros Estados o de sus ciudadanos? Sería útil que los Estados dieran ejemplos de las medidas pertinentes que hubiesen adoptado al respecto.

La Ley de Represión del Terrorismo de 1993 estableció delitos de terrorismo que son de carácter extraterritorial. En virtud del párrafo 1 del artículo 5 de la Ley, si una persona, sea o no nacional de Antigua y Barbuda, realiza en algún país un acto que, de haberlo realizado en Antigua y Barbuda, habría sido culpable en Antigua y Barbuda, será culpable, en Antigua y Barbuda, del delito del que habría sido culpable si lo hubiera cometido en este país.

También en el párrafo 4 del artículo 5 de la Ley, si una persona que no sea nacional de Antigua y Barbuda realiza fuera de Antigua y Barbuda y del país del que sea nacional un acto que le hace culpable en el país en el que se realizó y que, si hubiera sido nacional de Antigua y Barbuda, le habría hecho en Antigua y Barbuda culpable de un delito de terrorismo, será en Antigua y Barbuda culpable del delito del que la Ley le habría hecho culpable si hubiera sido nacional de Antigua y Barbuda.

Inciso e) —¿Qué medidas se han adoptando para tipificar los actos de terrorismo como delitos graves y para velar por que un castigo corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo? Sírvase dar ejemplos de las sentencias condenatorias dictadas y de las penas impuestas.

Antigua y Barbuda ha promulgado leyes que declaran delitos graves los que se describen en las convenciones en que Antigua y Barbuda es parte. Son los delitos previstos en las convenciones promulgadas en virtud de la Ley de Represión del Terrorismo de 1993, la Ley sobre Delitos relativos a Materiales Nucleares de 1993, y la Ley sobre Personas Internacionalmente Protegidas de 1993.

El Gobierno de Antigua y Barbuda está ahora proyectando una modificación de la Ley de Prevención del Terrorismo de 2001 que tipificará delitos específicos para responder a los problemas surgidos desde el 11 de septiembre de 2001.

Inciso f) —¿Qué procedimientos y mecanismos existen para proporcionar asistencia a otros Estados? Sírvase dar los detalles disponibles acerca de la forma en que se han empleado en la práctica.

Hay tres leyes vigentes en virtud de las cuales Antigua y Barbuda está obligada a ayudar a otros Estados en la investigación y persecución de delitos. Son los siguientes: la Ley de Asistencia Mutua en Cuestiones Penales No. 2 de 1993, la Ley de Extradición No. 12 de 1993 y la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero No. 9 de 1996.

La Ley de Asistencia Mutua en Cuestiones Penales prescribe el procedimiento para prestar asistencia a los Estados miembros del Commonwealth, si lo solicitan, cuando esos Estados estén investigando o procediendo contra delitos sobre los que el Estado solicitado tenga información que pueda ayudar en la investigación o persecución del delito. La Ley prevé también la prestación de asistencia a países no pertenecientes al Commonwealth. Entre esos delitos figuran los delitos graves y los actos terroristas.

Entre las cuestiones en las que se presta asistencia judicial mutua figuran los delitos graves previstos en la Ley de Represión del Terrorismo, la Ley sobre Delitos relativos a materiales nucleares, la Ley sobre la Toma de Rehenes, la Ley sobre el Apoderamiento por la Fuerza de Aeronaves y la Ley sobre el Genocidio.

La Ley de Extradición prevé el procedimiento de extradición de las personas que se encuentren en Antigua y Barbuda y que sean buscadas en países de fuera de Antigua y Barbuda por haber cometido determinados delitos, en particular delitos terroristas, en esos países.

La Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero prevé también la posibilidad de que Antigua y Barbuda coopere con los organismos internacionales en la investigación de las actividades criminales relativas al blanqueo de dinero, el producto de actividades delictivas o los delitos relacionados con los estupefacientes.

Los órganos de Antigua y Barbuda encargados de hacer cumplir la Ley cooperan plenamente con la Interpol, el FBI y la Real Policía Montada del Canadá en la investigación y persecución de los delitos transfronterizos.

El Gobierno de Antigua y Barbuda recibe de vez en cuando solicitudes hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Canadá, en virtud de la ley de extradición, para extraditar a personas que viven en Antigua y Barbuda y que son buscadas en los Estados Unidos y el Canadá por delitos cometidos en esos países. El procedimiento consiste en solicitar por vía diplomática el traslado de la persona buscada al Estado solicitante. La Ley de extradición en que se funda la solicitud se estudia y si las pruebas aportadas cumplen los requisitos de extradición, el tribunal puede dictar la orden de extradición de la persona de que se trate.

Antigua y Barbuda ha cooperado también con los Estados Unidos de América, el Canadá, el Reino Unido y Bélgica, prestando asistencia en virtud de la Ley de asistencia mutua en asuntos penales y del Tratado de asistencia mutua con los Estados Unidos de América.

Inciso g) —¿De qué forma impiden la circulación de terroristas los controles fronterizos en su país? ¿De qué forma apoyan esa tarea sus procedimientos para la emisión de documentos de identidad y de viaje? ¿Qué medidas existen para evitar su falsificación, etc.?

Los Servicios de Inmigración y Aduanas de Antigua y Barbuda han establecido desde el 11 de septiembre de 2001 un control fronterizo estricto de la circulación de mercaderías y productos que entran en Antigua y Barbuda.

En cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad se han adoptado medidas específicas para hacer más estrictas las medidas de seguridad en las fronteras. Todo el equipaje que va a acompañar a los pasajeros es examinado y comprobado a fondo antes de ponerlo a bordo. Se ha formado a los investigadores para que busquen determinados productos estratégicos que pueden ser utilizados como precursores de las armas terroristas. Estas verificaciones estrictas han permitido descubrir sustancias prohibidas, artículos de contrabando y dinero no declarado.

En virtud de la Ley de Inmigración y Pasaportes, el Gabinete está facultado para declarar indeseables a determinadas personas o categorías de personas como inmigrantes ilegales. Los terroristas y los individuos que se sabe que pertenecen a

organizaciones terroristas o que financian actividades terroristas están comprendidos en esta categoría de personas. Por tanto, todo individuo de esas características que se encuentre en Antigua y Barbuda puede ser deportado.

Las personas que solicitan la nacionalidad de Antigua y Barbuda deben haber residido en el país durante siete años por lo menos y están obligados a facilitar información de antecedentes de sus países de origen y los nombres y direcciones de sus padres. Deben presentar también un informe policial y son objeto de averiguaciones e investigaciones mediante la técnica de perfiles.

Los pasaportes de Antigua y Barbuda, como los de muchos países, tienen una serie de dispositivos de seguridad con objeto impedir la falsificación, la reproducción falsa y el uso fraudulento. Antigua y Barbuda exige a los nacionales de determinados países la obtención de visado antes de entrar en el país.

Párrafo 3 de la parte dispositiva

Inciso a) —¿Qué medidas se han adoptado para intensificar y acelerar el intercambio de información operativa en las esferas indicadas en este inciso?

Antigua y Barbuda ya ha establecido una avanzada Dependencia de Investigación Financiera (FIU) para la aplicación de su legislación contra el blanqueo de dinero, a saber: la Oficina de la Policía Nacional sobre blanqueo de dinero y control de estupefacientes. El Director de esta Oficina es la Autoridad Supervisora en virtud de la MLPA y, por tanto, tiene amplias facultades relativas a las instituciones financieras nacionales y recibe información financiera reservada de esas instituciones. La mencionada Oficina ha establecido también estrechas relaciones con la FIU tanto dentro de la región del Caribe como en los países de América y Europa. El Director de esa Oficina es también la Autoridad Supervisora con arreglo a la Ley de Prevención del Terrorismo de 2001. Esto significa que las múltiples vías de comunicación establecidas por esa Oficina para el control del blanqueo de dinero también pueden utilizarse para luchar contra el terrorismo y financiación del terrorismo.

Antigua y Barbuda tiene acuerdos multilaterales con organizaciones internacionales para compartir información relativa a la delincuencia transnacional organizada, en particular las actividades terroristas. La Fuerza de Policía de Antigua y Barbuda trabajan en íntima relación con las fuerzas de policía de los territorios de la región del Caribe. Existen acuerdos oficiales y oficiosos entre Antigua y Barbuda y otros países en virtud de los cuales se presta asistencia para combatir los delitos graves, en particular el terrorismo y los delitos conexos. Además, Antigua y Barbuda tiene un acuerdo oficioso con la Real Policía Montada del Canadá y con el FBI para compartir información y para la ayuda recíproca respecto de la investigación y persecución de los delitos transfronterizos.

Antigua y Barbuda pertenece al Sistema de Seguridad Regional de los países del Caribe Oriental y Barbados. El Sistema de Seguridad tiene por objeto proporcionar un mecanismo común para la vigilancia territorial y para compartir información relativa al movimiento de los traficantes de estupefacientes y las actividades de bandas de delincuentes en la región, en particular información para luchar contra el terrorismo y los delitos transnacionales.

Inciso b) —¿Qué medidas se han adoptado para intercambiar información y cooperar en las esferas indicadas en este inciso?

Por medio del Sistema de Seguridad Regional, la Guarda Costera y los Servicios de Inmigración y Aduanas vigilan el movimiento de las personas y las mercancías, en particular las mercancías pasadas de contrabando. En virtud de la Ley de Control y Gestión Aduaneros existen normas en cuya virtud todos los pasajeros que salen de Antigua y Barbuda o que llegan a este país tienen la obligación de declarar, entre otras cosas, toda cantidad superior a 5.000 dólares de los EE.UU. que porten consigo y de facilitar información sobre el origen de ese dinero. También están prohibidas las armas de fuego en los vuelos y se han dado instrucciones especiales a los vistas de aduanas para que vigilen y estén atentos a las armas de fuego y a los objetos estratégicos que puedan utilizarse como armas ofensivas.

Las leyes de inmigración de Antigua y Barbuda facultan al Gobierno a declarar inmigrantes ilegales a determinadas personas o categorías de personas. A un inmigrante ilegal no se le permite entrar en Antigua y Barbuda.

El Gobierno de Antigua y Barbuda ha adoptado medidas apropiadas para ratificar, de conformidad con sus leyes, las convenciones de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo.

Inciso c) —¿Qué medidas se han adoptado para cooperar en las esferas indicadas en este inciso?

El Gobierno de Antigua y Barbuda ha ratificado la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y demás resoluciones internacionales contra el terrorismo. Esas convenciones piden la cooperación en la lucha contra el terrorismo y otros delitos transnacionales.

La Ley de Asistencia Mutua en Cuestiones Penales, el Tratado de Asistencia Mutua en Cuestiones Penales y la Ley de Extradición, así como otros acuerdos oficiales con organizaciones internacionales y regionales, son los medios por los que Antigua y Barbuda coopera con otros Estados para combatir el terrorismo y otros delitos transnacionales.

Inciso d) —¿Cuál es la intención de su Gobierno acerca de la firma y ratificación de los convenios y protocolos a que se hace referencia en este inciso?

El Gobierno de Antigua y Barbuda ha ratificado los siguientes Convenios de las Naciones Unidas para combatir y eliminar el terrorismo:

1. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción.
2. La Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Aplicada por la Ley de delitos relativos a los materiales nucleares, No. 16 de 1993, que entró en vigor el 10 de junio de 1993.
3. La Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Aplicada por la Ley sobre las personas internacionalmente protegidas, No. 14 de 1993, que entró en vigor el 10 de junio de 1993.

4. La Convención internacional contra la toma de rehenes de 1979. Aplicada por la Ley sobre la toma de rehenes, No. 4 de 1993, que entró en vigor el 18 de febrero de 1993.
5. El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Aplicada por la Ley sobre el apoderamiento ilícito de aviones y aeronaves, Cap. 200, que entró en vigor el 3 de diciembre de 1975.
6. La Convención sobre la prevención y el castigo del delito de genocidio de 1948. Aplicada por la Ley del genocidio, Cap. 191, que entró en vigor el 3 de diciembre de 1975.

Antigua y Barbuda promulgó la Ley de Represión del Terrorismo, No. 17 de 1993, en 1993. Esta ley prevé, entre otras cosas, una lista que especifica los actos que constituyen delitos de terrorismo. Entre los delitos especificados en la ley figuran el asesinato, el homicidio, la violación, el secuestro, la prisión fraudulenta, el incendio voluntario, el uso de explosivos para cometer delitos haciendo explotar pólvora o enviando a una persona una sustancia explosiva con el propósito de causarle daños físicos graves o poniendo pólvora cerca de un edificio con el propósito de causar daños físicos a una persona.

Inciso e) —Sírvasse facilitar información acerca de la aplicación de los convenios, protocolos y resoluciones a que hace referencia este inciso.

Véase el inciso d) *supra*.

Inciso f) —¿Qué legislación, procedimientos y mecanismos existen para asegurarse de que los solicitantes de asilo no hayan participado en actividades terroristas antes de conceder el estatuto de refugiado? Sírvasse dar ejemplos de cualquier caso de interés.

El Gobierno de Antigua y Barbuda se propone modificar la Ley de Prevención del Terrorismo introduciendo una disposición para que no pueda concederse asilo a un solicitante de asilo del que sepa o sospeche que ha realizado actividades terroristas.

Antigua y Barbuda, por ser parte en la Convención sobre los Refugiados de 1951, cumple con la disposición que no permite conceder el asilo a las personas que sean buscadas por haber cometido crímenes contra la humanidad o por ser sospechosas de haberlos cometido.

Inciso g) —¿Qué procedimientos existen para impedir que los terroristas abusen del estatuto de refugiado? Sírvasse facilitar detalles de la legislación y de los procedimientos administrativos que impiden que las reclamaciones de motivación política se reconozcan como fundamento para denegar la solicitud de extradición de los presuntos terroristas. Sírvasse dar ejemplos de cualquier caso de interés.

En virtud de la Ley de Inmigración y Pasaportes, el Gobierno de Antigua y Barbuda está facultado para declarar inmigrantes ilegales a las personas y categoría de personas consideradas indeseables. Así, a los inmigrantes ilegales se les niega la entrada en Antigua y Barbuda. Todo inmigrante ilegal encontrado en Antigua y Barbuda puede ser perseguido judicialmente y, si es declarado culpable, puede ser castigado y expulsado.

Desde el 11 de septiembre de 2001, en Antigua y Barbuda la Autoridad encargada de la Inmigración ha adoptado medidas para analizar el pasaporte y documentos de viaje de todas las personas que entran en Antigua y Barbuda o salen de este país. Las verificaciones de seguridad se efectúan mediante un sistema informatizado. Este sistema puede facilitar instantáneamente la identidad y los datos concretos, tales como la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad y el número de pasaporte del titular del pasaporte. Indica también el último lugar visitado por la persona y la identidad de la línea de transportes por la que la persona viajó a Antigua y Barbuda.

El sistema informatizado permite a la Autoridad encargada de la Inmigración seguir el rastro de las personas que utilizan pasaportes falsos para salir de Antigua y Barbuda.

En virtud de la Ley de Extradición, las personas declaradas culpables de delitos terroristas fuera de Antigua y Barbuda pueden ser extraditadas o expulsadas de Antigua y Barbuda. Estos delitos extraditables se especifican en la Ley de Extradición como delitos previstos en las convenciones siguientes:

- a) El Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves (Convenio de Tokio de 1963);
- b) El Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (Convenio de La Haya);
- c) El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Convenio de Montreal de 1971);
- d) La Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1973;
- e) La Convención internacional contra la toma de rehenes (Convención contra la Toma de Rehenes, 1979);
- f) La Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Convención sobre los materiales nucleares de 1980);
- g) La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la tortura de 1984); y
- h) La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Otros delitos cometidos según la Ley de Represión del Terrorismo son extraditables sin que haya un acuerdo de extradición entre Antigua y Barbuda y el Estado solicitante.

Párrafo 4 de la parte dispositiva

La Cámara de Representantes de Antigua y Barbuda ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos contra el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas.

Ahora se está redactando la legislación para aplicar esta Convención. La Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Interamericana para la Lucha contra el Terrorismo se ratificarán cuando la Cámara de Representantes se reúna en julio de 2002.